

Cuestión Agraria
Vol. 3, Julio de 2017, 157–186

Evo Morales, “transformismo” y consolidación del capitalismo agrario en Bolivia¹

Jeffery R. Webber²

Este artículo argumenta que, a pesar de las afirmaciones en sentido contrario, no ha habido una reforma agraria extensiva e igualitaria en Bolivia desde que Evo Morales asumió la presidencia en 2006. Para explicar los procesos agrarios durante la década bajo el gobierno de Morales hasta el presente (2006-2016), se examina el equilibrio cambiante dentro de las fuerzas agrarias en la sociedad boliviana así como las transformaciones en la composición de clase del bloque gobernante entre 2006 y 2010. Este trabajo divide el debate sobre los procesos de reforma agraria durante esta década en dos períodos, uno de disputa insurgente (2006-2009), y otro de alianza agro-capital-Estado (2010-2016). Las transformaciones en las alianzas de clase a lo largo de estos períodos pueden ser entendidas teóricamente a través del concepto de “transformismo” de Gramsci. En particular, este concepto recoge tanto la forma en que los principales líderes de los movimientos indígenas-campesinos han sido absorbidos en los aparatos del Estado y, por tanto, decapitados; y la dialéctica de transformación/restauración que caracteriza al “proceso de cambio” boliviano en curso.

Palabras clave: reforma agraria, Bolivia, lucha de clases, Evo Morales, campesinos

Introducción

Según el vicepresidente Álvaro García Linera, se abrió un proceso revolucionario en Bolivia el año 2000 y pasó por una diversidad de fases. Este culminó en la elección y reelección de Evo Morales en 2005 y 2009 como líder del Movimiento al Socialismo (MAS), con una última consolidación alcanzada mediante la elección de octubre de 2014. La hegemonía fue alcanzada por el MAS en 2010, tras lo cual

¹ Este artículo ha sido publicado en inglés en el *Journal of Agrarian Change* 2017; 17. Esta traducción y su publicación ha sido autorizada por el autor y los editores a quienes agradecemos.

² Profesor titular en la Escuela de políticas y relaciones internacionales de la Universidad Queen Mary de Londres. Es miembro del consejo editorial de *Historical Materialism*. Es el autor de *From the Last Day of Oppression, and the First Day of the Same: The Politics and Economics of the New Latin American Left* (2017), *Red October: Left-Indigenous Struggles in Modern Bolivia* (2012), y *From Rebellion to Reform in Bolivia: Class Struggle, Indigenous Liberation and the Politics of Evo Morales* (2011). También es coautor, con Todd Gordon, de *Blood of Extraction: Canadian Imperialism in Latin America* (2016), (j.r.webber@qmul.ac.uk).

las tensiones y contradicciones del “proceso de cambio” se volvieron creativas, operando las fuerzas internas dentro de un bloque nacional-popular de apoyo al gobierno. A partir de entonces, el pueblo boliviano estaba así unido en torno a la plurinacionalidad, la autonomía territorial indígena y una economía plural que incluía formas de propiedad públicas, privadas y socio comunitarias, con una presencia estatal en la economía subordinando a las otras formas de propiedad. El proceso está en movimiento hacia un Estado integral, entendido como la disolución final del Estado dentro de la sociedad, mientras que la economía se mueve –aun con retrocesos– hacia una lógica dominada por el valor de uso por encima del valor de cambio (García Linera 2011). En la mirada oficial se interpreta que la reciente reforma agraria ha sido extensiva, transformadora y ha jugado un papel fundamental en este proceso revolucionario (INRA 2015).

Este trabajo desafía la noción de que en Bolivia se ha producido una reforma agraria amplia e igualitaria desde que Evo Morales asumió la presidencia en 2006. El argumento gira en torno a los equilibrios cambiantes dentro de las fuerzas agrarias en la sociedad boliviana, así como en relación a los cambios en la composición de clase del bloque gobernante del MAS. Inicialmente, bajo el gobierno de Morales, hubo un periodo entre 2006 y 2009 en el que la alianza del movimiento indígena-campesino, el Pacto de Unidad, luchó desde abajo por una auténtica transformación de la estructura de clases rurales bolivianas, periodo en el que la elite agroindustrial confrontó abiertamente al gobierno central a través de una campaña de desestabilización autonómica y regionalista, con sede en Santa Cruz y que se irradió hacia el resto de los departamentos de las tierras bajas del país. Santa Cruz es el centro más dinámico de la riqueza económica y del poder en Bolivia y fue el punto de apoyo geográfico del movimiento elitista de las tierras bajas orientales (incluyendo los departamentos de Santa Cruz, Tarija, Beni y Pando) que demandó una radical autonomía departamental en la región durante los primeros años del gobierno del MAS, debido a la percepción de esta élite regional de que perdía su poder de influencia directa sobre la política estatal. El principal terreno institucional de lucha durante estos primeros años del régimen de Morales fue la Asamblea Constituyente (2006-2007), y durante este período había la posibilidad de hacer profundas reformas estructurales para el campo. No obstante, para el año 2010 el gobierno de Morales había derrotado políticamente el proyecto autonómico en las tierras bajas y esto sentó las bases para un realineamiento de clase en el bloque gobernante. Entre 2010 y 2016 surgió una novedosa alianza agro-capital-Estado, con apoyo subordinado de campesinos ricos de los sectores de exportación comercial de coca, soya, quinua, entre otros. El Pacto de Unidad se fragmentó y los movimientos indígenas de las tierras bajas fueron expulsados de su inicial participación en la alianza con el gobierno entre 2006 y 2009.

El resultado de estos cambios en la composición de clase para la reforma agraria ha sido dramático. Fundamentalmente, las zonas estratégicas de tierras productivas del país se han concentrado en manos del capital agroindustrial nacional y transnacional dedicado a la producción de soya, y sus derivados, para la exportación. Por otra parte, la tierra marginal, la menos productiva del país, contempla las zonas más densamente pobladas por la mayoría de campesinos indígenas sin tierra o con muy poca tierra. Ha habido muy poca redistribución de tierras a través de la expropiación de propiedades de terratenientes y se ha distribuido relativamente muy poca propiedad estatal en zonas de tierras marginales de bajo o ningún potencial agrícola. En medio de los capitalistas agroindustriales, quienes capturan la mayor parte de la renta agrícola, y los campesinos sin tierra y con poca tierra, se encuentra un estrato de campesinos ricos o medianos agricultores capitalistas quienes han sido subordinadamente incorporados, en términos económicos, dentro de una cadena de valor de cultivos comerciales controlada por transnacionales y, en términos políticos, dentro de la coalición agraria del bloque gobernante conformada entre el Estado y el capital agrícola industrial.

Estas transformaciones en las alianzas de clase a través del tiempo pueden ser entendidas teóricamente por medio del concepto de “transformismo” de Antonio Gramsci. Para Massimo Modonesi (2013), en la actualidad la revolución pasiva de América del Sur implica un proceso de modernización promovido desde arriba, que reconoce parcial y cuidadosamente las demandas procedentes desde los que están situados abajo. En la lectura de Modonesi sobre Gramsci, la revolución pasiva abarca una combinación desigual y dialéctica de dos tendencias simultáneamente presentes en una sola época: una de restauración y otra de revolución, una de preservación y otra de transformación. Las dos tendencias coexisten conjuntamente pero es posible identificar una tendencia que finalmente determina o caracteriza el proceso o ciclo de una época dada (Modonesi 2012, 141). Los rasgos transformadores de una revolución pasiva marcan un conjunto distinto de cambios respecto al período precedente, pero estos en última instancia acaban garantizando la estabilidad de las relaciones fundamentales de dominación, aun cuando éstas asuman nuevas formas políticas (ibíd., 142). Las revoluciones pasivas no implican la restauración total del viejo orden, ni la plena reconstrucción del status quo anterior o una revolución radical. Al contrario, los cambios implican una dialéctica de revolución/restauración, de transformación/preservación (ibíd., 143).

Las capacidades de movilización social desde abajo son frenadas o cooptadas en etapas tempranas –o selectivamente reprimidas– mientras se restablece la iniciativa política de facciones de las clases dominantes. Las revoluciones pasivas implican el establecimiento de una forma de dominación capaz de llevar a cabo reformas conservadoras enmascaradas en el lenguaje de los impulsos tempranos

que emergen desde abajo, logrando así un consenso pasivo de las clases dominadas (ibíd., 143). Bajo la revolución pasiva, más que una restauración instantánea se produce un cambio molecular en el equilibrio de fuerzas reduciendo gradualmente las capacidades autónomas de organización y movilización popular a través de la cooptación, garantizando pasividad con respecto al nuevo orden y fomentando la desmovilización o al menos controlando la movilización de las clases populares (ibíd., 149).

Visto desde el lente del “transformismo”, hay dos partes en el análisis del papel de la reforma agraria y del capitalismo agrario en el gobierno de Morales entre 2006 y 2016. La primera, etiquetada como confrontación insurgente, mapea el terreno de la lucha de clases y las alianzas de clase durante la primera administración (2006-2009) y los concomitantes cambios y continuidades en la tenencia de la tierra que surgieron como resultado. La segunda, llamada alianza agro-capital-Estado, traza los cambios en estas áreas que emergieron de la novedosa configuración de clase asumida por el bloque gobernante entre 2010 y 2016.

2. Política agrícola bajo Morales

Antes de pasar directamente a estas cuestiones esenciales, es necesario decir algunas palabras sobre la política agrícola y el gasto público durante la gestión de Morales a fin de evitar objeciones a mi argumento central en relación con la tenencia de la tierra y las relaciones de propiedad, que podrían surgir de círculos más orientados a la política. Es evidente que el gobierno del MAS desplegó una gama variada de iniciativas que aparentemente institucionalizaron los elementos del compromiso retórico de la administración con los sectores campesinos y comunitarios por encima de la agroindustria y la seguridad alimentaria, y la soberanía alimentaria por encima de la producción agrícola orientada a la exportación y con la justicia social agraria frente a la cruda desigualdad (Gobierno de Bolivia 2006, 2010). La creación en 2007 de una nueva empresa estatal, la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (EMAPA), es uno de los ejemplos más destacables. El mandato de EMAPA ha sido apoyar la producción y comercialización de pequeños agricultores en el mercado agrícola con el fin de promover agendas de desarrollo rural como la seguridad y la soberanía alimentaria. Al concentrar la mayor parte de su presupuesto (US\$ 148 millones en 2011) en pequeños y medianos productores del departamento de Santa Cruz, EMAPA ofrece préstamos sin interés, semillas, insumos y asistencia técnica (Córdoba y Jansen 2014, 481). A pesar de la fanfarria oficial en torno a esta empresa estatal, el gasto público real destinado a través de EMAPA a pequeños productores ha sido insignificante en términos relativos. Por ejemplo, el gasto total en EMAPA oscila entre 0,9 y 2 por ciento del financiamiento total de las empresas públicas (Radhuber 2015, 100-101). Uno de

los estudios más completos sobre el impacto de EMAPA en la agricultura boliviana (Córdoba y Jansen 2014) concluye que su efecto en la dinámica del capitalismo agrario en Bolivia ha sido mínimo. La posición dominante de la agroindustria en términos de control sobre tecnología, insumos y cuotas de mercado no ha sido alterada. A pesar de emplear una retórica de sostenibilidad, soberanía y seguridad alimentaria, en la práctica EMAPA no ha ofrecido alternativa alguna al “monocultivo tecnológico y la forma de producción industrializada imaginada y dirigida por el capital agroindustrial” (Córdoba y Jansen 2014, 497). Finalmente, la evidencia sugiere que un creciente número de pequeños productores involucrados en los esquemas de EMAPA “desarrollan fuertes lazos con la agroindustria para el crédito y los servicios, utilizando a EMAPA como un intermediario para el acceso a los recursos” (ibíd.).

En 2009 el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras (MDRyT) se formalizó como nuevo ministerio encargado de asuntos agrarios y se convirtió en un medio clave a través del cual se implementó la política agrícola. Este ministerio trabaja a nivel nacional en conjunto con los gobiernos departamentales y municipales, los cuales han asumido una mayor responsabilidad en Bolivia desde que se introdujeron las reformas para la descentralización de la gobernabilidad en 1994 (LPP). Varios programas departamentales y municipales que ahora están bajo el control del MDRyT tienen el propósito de reducir la “inseguridad alimentaria”. Además de EMAPA, están el Programa de Apoyo a la Seguridad Alimentaria (PASA), el Servicio de Información sobre Seguridad Alimentaria y Alerta Temprana (SINSA-AT II), el programa de Desarrollo Económico Local para la Seguridad Alimentaria (DELSA) y el proyecto de apoyo directo a la Creación de Iniciativas Alimentarias Rurales (CRIAR) (Cuesta, Edmeades y Madrigal 2013, 2). Sin embargo, la proliferación de acrónimos de seguridad alimentaria puede ocultar los factores extractivistas subyacentes y las prioridades de gasto en Bolivia bajo el gobierno de Morales. Por ejemplo, entre 2000 y 2005 la proporción de la inversión pública total dirigida a la agricultura y ganadería varió entre 8,2 y 9,2 por ciento, mientras que la del sector de petróleo y gas fluctuó entre 0 y 0,6 por ciento. En 2011, la asignación para petróleo y gas subió al 13 por ciento, mientras que para la agricultura y ganadería cayó al 6,4 por ciento. Estos porcentajes se traducen en US\$ 315,5 millones para el petróleo y el gas en 2011 comparados con US\$ 154,6 millones para la agricultura y la ganadería (Radhuber 2015, 102). La extracción de recursos hidrocarbúricos y minería son las nuevas fuentes de especial importancia en la Bolivia contemporánea y la emancipación de campesinos pobres y comunidades indígenas es una consideración secundaria (Fabricant y Postero 2015).

Finalmente, quizás la ironía más importante en los asuntos de política rural en Bolivia bajo el gobierno de Morales es que el programa de desarrollo rural de los pequeños productores con el alcance nacional más extenso, es financiado

y operado por el Banco Mundial (BM). El Proyecto de Alianzas Rurales (PAR), concebido en sus inicios por el BM en 2005, fue aprobado por el gobierno de Morales en 2007 y formalmente vinculado al MDRyT. El PAR es una entidad autónoma dentro del MDRyT, financiada y administrada por el Banco Mundial, y responde sobre todo a las directrices generales de desarrollo del BM en lugar de las prioridades del gobierno boliviano (Córdova, Kees y González 2016, 7). Con el objetivo declarado de fortalecer las capacidades productivas y comerciales de los agricultores medianos, el PAR es el elemento clave de los 14 programas de inversión rural del BM en Bolivia. Bajo el gobierno de Morales, la inversión del Banco Mundial en estos programas ha sido de US\$ 450 millones (ibíd., 2).

Después de haber descrito sintéticamente algunos de los patrones de la política agrícola del gobierno de Morales, ahora es posible centrarse en la idea central de este documento, comenzando con una breve descripción de los patrones históricos de las relaciones sociales agrarias en el país.

3. Capitalismo agrario en Bolivia, 1952-2005

La Bolivia pre-revolucionaria se caracterizó por la mayor desigualdad en la concentración de tierras en toda América Latina, con el 82 por ciento de la tierra en posesión del 4 por ciento de los terratenientes (Eckstein 1983, 108). Sin embargo, a raíz de la Revolución Nacional de 1952, los campesinos radicalizados se apoderaron de grandes propiedades mediante una acción directa a gran escala en Cochabamba, La Paz, Oruro, Potosí y Chuquisaca, desafiando la estructura de clase rural pre-revolucionaria (Dunkerley 1984, 67). El gobierno del Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR) utilizó los recursos del Estado para lograr lo que esperaba sería la creación de dos alas de una burguesía industrial. En el occidente, promovió las políticas de industrialización por sustitución de importaciones en un esfuerzo por fomentar las condiciones para el desarrollo de una burguesía nacional madura, capaz de producir los bienes industriales hasta entonces importados, mientras que en el oriente (las tierras bajas del oriente) se esforzó para desarrollar una burguesía agropecuaria que teóricamente se dedicaría a satisfacer las demandas del mercado interno, así como producir excedentes para la exportación (Colque, Tinta y Sanjinés 2016,73; Toranzo 2015, 32-33).

La Reforma Agraria de 1953 estimuló la transformación de las haciendas agrícolas preexistentes en Santa Cruz en medianas y grandes empresas capitalistas. En muchos casos se otorgó títulos de propiedad privada de la tierra sobre lo que hasta entonces había sido propiedad estatal (tierras fiscales) y se construyó una carretera conectando las secciones occidental y oriental del país (de Cochabamba a Santa Cruz), al igual que una red de carreteras uniendo Santa Cruz con los países vecinos de Brasil y Argentina. Hasta mediados de los años cincuenta,

Santa Cruz no contaba con carretera alguna que la vinculara a otras regiones o a países vecinos. La carretera entre Cochabamba y Santa Cruz fue un componente principal del Plan Bohan, un programa de desarrollo planeado y financiado por los Estados Unidos con una visión orientada al desarrollo del capitalismo agrario en las tierras bajas orientales. Más tarde el Plan Bohan fue reformulado como la “Marcha hacia el este” (Colque 2014, 33). El Estado de 1952 también proporcionó maquinaria agrícola de alquiler para los agricultores privados, erigió barreras arancelarias, otorgó subsidios, fijó precios y desarrolló granjas experimentales para la investigación de nuevas técnicas agrícolas, líneas de crédito baratas y refineras públicas para el azúcar y el arroz (Ormachea 2015, 168-170). En Santa Cruz, entre 1953 y 1993, el Consejo Nacional de Reforma Agraria (CNRA) otorgó título legal a 97.000 propietarios sobre una extensión de 13,5 millones de hectáreas. 55 por ciento de estas propiedades (7,5 millones de hectáreas) eran grandes propiedades de más de 10.000 hectáreas (Colque 2014, 39). Durante los años setenta y principios de los ochenta, especialmente durante las dictaduras de Hugo Banzer (1971-1978) y Luis García Meza (1980-1981), el proceso de distribución de la tierra estuvo marcado por graves niveles de corrupción que permitieron la legalización de grandes propiedades agrarias en las tierras bajas del Este (Colque, Tinta y Sanjinés 2016, 77). Junto con la caña de azúcar y el arroz, el cultivo de algodón se expandió entre esta naciente burguesía agraria.

En las décadas posteriores a la Revolución Nacional, Santa Cruz se convirtió en el centro más dinámico de la acumulación capitalista en el campo boliviano, produciendo algodón, café, azúcar y madera para la exportación (Gill 1987, Stearman 1985). El dominio agroindustrial de Santa Cruz se consolidó y amplió con la implementación del neoliberalismo desde mediados de los años ochenta (Brabazon y Webber 2014). Entretanto, en el altiplano, los minifundios continuaron fragmentándose bajo el peso de la expansión demográfica y parcelas cada vez más pequeñas se dividieron entre los hijos a través de generaciones de familias en crecimiento. La economía campesina de subsistencia empezó a descomponerse en los años setenta y, con la crisis de la deuda de principios de los años ochenta y la sequía de 1982-1984, esta temprana descomposición maduraría rápidamente (Pérez 2015, 48).

Como en otras partes, el neoliberalismo boliviano hizo hincapié en una orientación hacia la agricultura de exportación. A lo largo de los 20 años de ortodoxia neoliberal (1985-2005), las corporaciones transnacionales y las grandes empresas agrícolas nacionales en Santa Cruz llegaron a dominar esta inserción acelerada en la economía global. Mientras que la economía campesina tradicional de las tierras altas se deterioraba, las empresas agroindustriales en las tierras bajas concentraron su dominio en unos pocos cultivos selectos, la soya sobre todo. Mientras que en 1986, el 77 por ciento de la superficie cultivada total del

país estaba destinada a cereales, frutas, hortalizas y tubérculos, donde predominaba la pequeña producción campesina; en 2004 estos cultivos disminuyeron al 48,2 por ciento del total nacional. Según otras estimaciones, la producción campesina en 1963 ascendía aproximadamente al 82 por ciento del valor total de la producción agropecuaria en Bolivia, mientras que en 2002 esta cifra había caído hasta el 39,7 por ciento, alcanzando la agricultura capitalista industrial el 60,3 por ciento (Ormachea 2007, 29-32).

4. Confrontación insurgente, 2006-2009

Cuando Evo Morales fue elegido en diciembre de 2005, luego de 5 años de movilización social rural y urbana a un nivel sin igual comparativamente con otros lugares de América Latina, el tema de la reforma agraria volvió al centro del debate político en Bolivia. La élite agroindustrial de las tierras bajas respondió altaneramente a las nuevas propuestas del gobierno que recogían las demandas de las clases rurales populares, amenazando con una insurrección contra el Estado e iniciando lo que sería una campaña de cuatro años de desestabilización regionalista/autonomista contra el gobierno central, desde la llamada “media luna”, o los departamentos de tierras bajas de Pando, Beni, Santa Cruz y Tarija (Webber 2011, 67-101). Articulando las demandas agrarias específicas de cada sector a la defensa más general de una “economía plural”, el gobierno de Morales comprometió rápidamente el apoyo estatal hacia tres sectores rurales clave, que se consideraban como mutuamente beneficiosos entre sí antes que intrínsecamente conflictivos: exportadores industriales a gran escala, productores campesinos familiares a pequeña escala y la tenencia de tierras indígenas comunales (La Prensa 2006). Este fue un periodo de lucha de clases relativamente abierto, en el que los resultados de la confrontación por el poder rural no estaban predeterminados. Había indicios tempranos de que dentro de la dialéctica gramsciana de transformación/restauración, el acento estaría en la primera.

En una señal temprana de confrontación entre el gobierno y los grandes terratenientes en el Este, Morales nombró a Alejandro Almaraz como Viceministro de Tierras, un militante activista de larga data y uno de los miembros fundadores de la dirección del MAS en los años noventa. Almaraz se convirtió en uno de los ideólogos decisivos –una fuerza simbólica– de los cambios legislativos sobre la reforma agraria introducidos por el gobierno de Morales: la Ley 3545 o la Ley de Reconducción Comunitaria de la Reforma Agraria (LRCRA) de noviembre de 2006 (La Razón 2012). Las movilizaciones sociales de 2000-2005 demandaron que el MAS, al menos, respondiera a las demandas fundamentales de justicia social en el campo. Asimismo, la fecha de vencimiento de la anterior ley de reforma agraria –denominada Ley del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), un proceso

de saneamiento y registro de tierras realizado por el INRA como institución (1996-2006)– también exigía una nueva ley que ampliara su tiempo de vigencia. El grado significativo en que la LRCRA modificó los principios de la Ley INRA fue justificado por el gobierno por los pobres resultados frente a la burocracia, la inercia y falta de transparencia, la redistribución corrupta de tierras para los poderosos, así como la trayectoria general del periodo 1996-2006 de reforma agraria que reforzó antes que desbaratar el poder de los latifundistas (Colque, Tinta y Sanjinés 2016, 162).

Los aspectos más novedosos de la Ley de Reconducción Comunitaria fueron la modificación del mecanismo de saneamiento y titulación de la Ley INRA, de modo que tenga mayor correspondencia con el espíritu de una reforma redistributiva. Se precisó el concepto de que las grandes propiedades tenían que cumplir obligatoriamente la función económica y social de la tierra (FES) para evitar la expropiación y la redistribución y se aclararon los procedimientos de reversión y expropiación para permitir una mayor facilidad en la aplicación de la norma. La distribución de la propiedad fiscal a campesinos y comunidades indígenas sin tierra o con poca tierra fue priorizada en la ley y se introdujeron nuevas enmiendas a los procedimientos legales para acelerar el proceso de saneamiento de las propiedades agrarias (ibíd., 163). Según el mismo Almaraz, la LRCRA tenía en su núcleo la concepción básica de que la tierra debía ser redistribuida de la minoría rica en tierras a la mayoría indígena sin tierra y con poca tierra (Almaraz 2015, 54). Para Almaraz, el contenido de la ley reflejaba las demandas de 20 años de lucha campesina indígena, conservando las ideas redistributivas presentes en la reforma agraria post-revolucionaria de 1953 pero trascendiendo los paradigmas anteriores de muchas maneras a través del reconocimiento explícito de los derechos comunitarios y territoriales de los indígenas de las tierras bajas (ibíd., 53).

A raíz de la introducción temprana de la nueva ley de reforma agraria, el principal terreno de la lucha de clases sobre el futuro de las relaciones sociales agrarias bolivianas se trasladó hacia los conflictos simultáneamente institucionales y extraparlamentarios sobre el contenido y la trayectoria de la Asamblea Constituyente entre 2006 y 2007 (Regalsky 2009). Aliado con el MAS dentro de la Asamblea Constituyente, pero a menudo tomando posturas independientes más a la izquierda del partido, estaba el denominado Pacto de Unidad. Esta alianza de movimientos sociales estaba compuesta por una serie de organizaciones populares y campesinas de tierras bajas y de tierras altas, incluyendo la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (CIDOB), el Consejo Nacional de Ayllus y Markas de Qullasuyu (CONAMAQ), la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), la Confederación Nacional de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias de Bolivia “Bartolina Sisa”(CNMCIOS-BS) y la Confederación Sindical de Comunidades Interculturales de Bolivia (CSCIB) (Viaña 2012, 382). Estas organizaciones buscaron aprovechar el proceso de Asamblea Constituyente

para refundar en Bolivia las relaciones entre el Estado y la sociedad sobre nuevas bases, entendiendo que el gobierno de Morales debía su existencia a la extraordinaria efervescencia de los movimientos entre 2000 y 2005. El Pacto de Unidad fue central en el dominio del MAS en la Asamblea Constituyente así como en la contienda política boliviana en general, para la articulación de nociones de espacio geográfico y territorio que van mucho más allá de las potencialidades simplemente productivas de la tierra. La noción de territorio indígena articulada por esta alianza indígena-campesina fue la que vinculó las formas culturales y simbólicas integrales de los modos de vida indígenas con la apropiación material de la tierra y el territorio. En este sentido, el territorio fue entendido como el fundamento material multidimensional que permite la reproducción de distintos modos indígenas de vida y libre determinación, incluyendo sus dimensiones culturales y simbólicas. Así pues, la tierra no fue reducida simplemente a un medio de apoyo económico o una base de subsistencia –aunque se entendió que implicaba– sino que también se concibió como requisito previo para conceptualizaciones posteriores de libre determinación indígena y formas de gobierno (Colque, Tinta y Sanjinés 2016, 44).

Para René Zavaleta (1986), uno de los más importantes teóricos sociales radicales del siglo XX en Bolivia, el país se concibe mejor como una sociedad abigarrada, o sociedad variopinto, en la que coexisten distintos tiempos históricos, modos de producción, concepciones del mundo y estructuras de autoridad. Una manera de concebir la lucha indígena del Pacto de Unidad en el proceso de la Asamblea Constituyente es pensar en ella como un método para recuperar esos tiempos históricos, modos de producción, concepciones del mundo y estructuras de autoridad que habían sido subordinadas históricamente al Estado republicano monocultural desde principios del siglo XIX y la combinación subsiguiente de la lógica racista del Estado republicano con la lógica de la acumulación de capital desde las primeras etapas embrionarias de la transición capitalista a finales del siglo XIX. De esta manera, la idea incrustada en la lucha del Pacto de Unidad por el territorio fue un esfuerzo para poner en tela de juicio la contradicción básica del Estado-nación boliviano y su forma de organización del territorio nacional, basada en la conquista colonial y los intereses del capital, los cuales se combinaron históricamente en un esfuerzo por hacer invisibles, a través de la imposición violenta, los territorios y modos de autogobierno indígenas que luchaban por persistir en formas subalternas (Lizárraga y Vacaflares 2014, 36).

Entretanto, la derecha autonomista de las tierras bajas intentaba subvertir el funcionamiento de la Asamblea Constituyente a través de una oposición formal desde adentro de sus estructuras institucionales y la desestabilización masiva extraparlamentaria dirigida a socavar el gobierno central. En agosto de 2008, el gobierno se fortaleció después de la convocatoria a un referéndum revocatorio, organizado por la oposición para expulsar al gobierno, lo que condujo a la rati-

ficación del Presidente y Vicepresidente con un impresionante 67 por ciento de votación nacional. Los prefectos de la oposición de los departamentos de La Paz y Cochabamba fueron revocados y reemplazados por partidarios del gobierno. Como era de esperar, el referéndum también ratificó a los prefectos de oposición en Santa Cruz, Tarija, Beni y Pando (Viaña 2012, 376-377). Después de perder terreno en el ámbito electoral, la derecha autonomista de las tierras bajas optó por una desestabilización extraparlamentaria bajo la forma de un “golpe cívico” a nivel departamental. Del 9 de septiembre al 16 de septiembre de 2008, se lanzó la mayor movilización de la derecha y 75 instituciones gubernamentales fueron ocupadas por movimientos cívicos conservadores en los departamentos de la “media luna”, incluyendo las oficinas de la institución estatal de reforma agraria (INRA) y la compañía telefónica (ENTEL). Los aeropuertos fueron tomados y Morales fue impedido de entrar a varios departamentos del país. Rubén Costas, el gobernador de Santa Cruz, había lanzado lo que él pensó que sería el asalto final al gobierno de Morales. Calificó al presidente de asesino, dijo que la paciencia de la gente de Santa Cruz se había agotado y que Morales tenía que irse. El Comité Cívico de Santa Cruz coordinó las acciones desde la cúpula mientras que sus violentos grupos de choque de la Unión Juvenil Cruceñista (UJC) llevaron a cabo la necesaria violencia de matonaje en las calles (Miranda 2013a).

Sin embargo, los acontecimientos en Porvenir, departamento de Pando, tomaron un giro que eventualmente frenó de golpe el impulso de la oposición. Decenas de campesinos y estudiantes partidarios del gobierno fueron asesinados por opositores de derecha vinculados al prefecto de Pando, Leopoldo Fernández, y en respuesta el gobierno de Morales se apoderó de Pando militarmente y las organizaciones campesinas e indígenas leales al partido comenzaron a organizar una marcha masiva amenazando con rodear la ciudad de Santa Cruz. Los jóvenes indígenas organizados del barrio popular “Plan 3000” de Santa Cruz también participaron en disturbios callejeros cada vez más aventajados contra los hooligans de la UJC. El resultado central de esta dinámica condujo en última instancia a un aumento concertado del apoyo al gobierno y a la casi desaparición del bloque organizado de oposición, con consecuencias decisivas para la posterior política boliviana (Viaña 2012, 377).

La Asamblea Constituyente había acordado un texto para la nueva Constitución en diciembre de 2007. Sin embargo y en el contexto de la persistente inestabilidad política en el país, solo una versión modificada y moderada del texto fue aprobada por el Congreso boliviano a fines de octubre de 2008. El texto fue posteriormente ratificado por dos tercios del electorado boliviano a través de un referéndum directo en enero de 2009. En términos de contenido, esta Constitución ha sido descrita con precisión como un “mosaico de reivindicaciones solapadas y muchas veces conflictivas que involucran a pueblos indígenas y ciudadanos no indígenas” en lugar de “un conjunto unificado de reglas para gobernar el territorio nacional” (Regalsky

2010, 36). Por un lado, promueve la protección de los derechos indígenas a la libre determinación y la autonomía (artículo 2) mientras que por otro lado, refuerza los derechos de propiedad privada (artículo 315) (Mun 2015, 28, Regalsky 2010, 36). Si bien el artículo 38 establece un límite máximo de 5.000 hectáreas de tierra para cada propietario, el artículo 315.11 permite que los grupos agroindustriales estén constituidos por un número ilimitado de socios comerciales, a cada uno de los cuales se les permite tener ese máximo de 5.000 hectáreas (McKay y Colque 2015, 15). El límite máximo de 5.000 hectáreas no se aplica retroactivamente a las grandes propiedades preexistentes. Es más, la Constitución declara que Bolivia es un “Estado plurinacional”, al mismo tiempo que legaliza los grandes latifundios y subordina las reivindicaciones de autonomía territorial indígena a los límites departamentales existentes (Regalsky 2010, 37; Regalsky 2011). Willem Assies (2011, 115) argumenta que “la Constitución garantiza el derecho a la propiedad privada (en las zonas rurales a condición de que cumpla con la función económica y social) junto con la propiedad comunal y estatal”. Así se ve desde la primera administración de Morales el grado particular en el que algunas demandas populares, como en la formulación de Gramsci de la revolución pasiva, han sido incorporadas dentro de la matriz de poder existente (tendencia transformadora), al tiempo que sostiene las relaciones fundacionales de dominación (tendencia restauradora).

¿Cuáles fueron algunos de los primeros resultados en el saneamiento de tierras y titulación introducidos por la nueva ley de reforma agraria y en el contexto de la nueva Constitución? En resumen, se produjo un aumento dramático en la eficiencia del registro y la titulación del INRA, pero estos aumentos de eficiencia no contrarrestaron las continuidades arraigadas desde el periodo anterior debido a que la desigualdad de la estructura de clases rurales de Bolivia prácticamente permaneció intacta. En el período 2006-2009 hubo poco avance en el registro y titulación de propiedades agroindustriales medianas y grandes en Santa Cruz, tanto porque las prioridades del gobierno estaban en otras partes como también debido a la feroz oposición política inicialmente montada por los grandes terratenientes en las tierras bajas en contra de la LRCRA (Urioste 2012, 443). Sin embargo, el ritmo de saneamiento y de titulación de tierras durante este período y en un nivel agregado fue notablemente elevado. Recordemos que durante el período 1996-2006 de registro de tierras del INRA, 12,4 millones de hectáreas fueron formalmente saneadas y tituladas. En un lapso de tiempo mucho más corto entre 2007 y 2009, 11,7 millones de hectáreas fueron saneadas y tituladas. La suma de estos dos períodos alcanza los 24,1 millones de hectáreas, el 22 por ciento de la superficie total prevista para ser saneada (Colque, Tinta y Sanjinés 2016, 163-164). El hecho de que el número de títulos otorgados en los tres primeros años de la administración de Morales sea casi igual al alcanzado en una década bajo la ley INRA, es testimonio de la eficiencia de los nuevos procedimientos y

disposiciones legales introducidos por la LRCRA. Los detalles del progreso del saneamiento y titulación de la tierra entre 2007 y 2009 se muestran en el Cuadro 1.

Cuadro 1
Estado de avance del proceso de saneamiento y titulación 2007-2009

	Nº Títulos	Superficie en ha	%
1. Superficie objeto de saneamiento		106.751.722	100,0
2. Superficie titulada en el periodo	80.525	11.799.221	11,1 (100)
2.1 Pequeña propiedad	77.907	846.865	7,2
2.2 Mediana propiedad	504	322.376	2,7
2.3 Empresa agropecuaria	136	427.701	3,6
2.4 Propiedad comunaria	1.848	2.659.576	22,5
2.5 Tierras comunitarias de origen (TCO)	130	7.542.703	63,9
3. Tierras fiscales saneadas		15.239.784	14,3
4. Superficie en proceso de saneamiento		14.258.859	13,4
5. Superficie sin sanear		52.870.232	49,5
6. Acumulado periodo anterior	22.178	12.583.626	11,8
6.1 Superficie titulada (1996-2006)	22.178	12.476.740	11,7
6.2 Tierras fiscales saneadas (1996-2006)		106.886	0,1

Fuente: Colque, Tinta y Sanjinés (2016, 164).

Si bien la cifra de 11,7 millones de hectáreas tituladas es impresionante en relación con el período 1996-2006, es muy inferior a los 31,1 millones de hectáreas que el INRA pretendía sanear entre enero de 2006 y diciembre de 2009 (INRA, 2010). La primera distorsión en las cifras del INRA es que, debido a que comienzan su calendario en enero de 2006, 3,4 millones de hectáreas tituladas entre enero y octubre de 2006, según la Ley INRA, se calculan erróneamente como producto de la nueva legislación de Morales. En segundo lugar, y de manera más significativa, la cifra de 31,1 millones de hectáreas a la que se refieren los funcionarios del INRA durante el primer gobierno de Morales representa tanto las propiedades “tituladas” como las “saneadas”. Esto exagera el trabajo realizado bajo el periodo de Morales, ya que 18,6 millones de hectáreas de propiedades “saneadas” ya habían sido registradas en el período 1996-2006 (ibíd., 165).

La principal novedad del período 2006-2009, además de la aceleración del proceso de saneamiento y titulación, fue la notable extensión reconocida de Tierras Comunitarias de Origen (TCO) en las tierras bajas del oriente y las tierras altas de occidente, en particular en los departamentos de Oruro y Potosí. Pero el ciclo 2006-2009 no estuvo marcado por ninguna redistribución radical de la tierra (ibíd., 170). No se ofreció una solución a los problemas de la falta de tierra y pobreza en las regiones más densamente pobladas de Bolivia (ibíd., 172). La mayor parte de la redistribución limitada de tierras que tuvo lugar a través de la concesión de títulos de propiedad colectiva a las TCO no fue consecuencia de la expropiación de grandes propiedades y su posterior redistribución. Según el INRA, el gobierno del MAS había redistribuido 3,9 millones de hectáreas en 2010. Sin embargo, esta cifra incluía 499.000 hectáreas en Oruro y 492.000 hectáreas en Potosí que fueron meramente cambios en el título de proindiviso (tierras comunitarias colectivamente tituladas y que no están formalmente divididas en parcelas individuales) a la categoría de TCO; esto es, una distinción jurídica entre dos formas comunales de titulación de la tierra (Control Ciudadano 2012, 6-7). Entonces, estas aparentes transferencias de tierras solo han sido poco más que una alteración en el estatus legal. Si se excluyen estas cifras, la redistribución a través del proceso de saneamiento de TCO habría alcanzado en 2010 la cifra de 2,9 millones de hectáreas. De este total, la gran mayoría de estas tierras distribuidas (72,8 por ciento) fueron transferencias de propiedades estatales (tierras fiscales) a TCO. Sólo el 27,2 por ciento de las tierras distribuidas a las TCO fueron resultado de expropiaciones o expropiaciones parciales (ibíd., 10).

De hecho, a pesar del enfrentamiento político inicial con la élite agroindustrial de las tierras bajas, el dinamismo de la economía de la soya siguió acelerándose en los primeros años del gobierno de Morales, mientras que la producción campesina continuó su descomposición. Un indicador de esta tendencia es que los cultivos industriales representaban el 70,1 por ciento de la producción agrícola entre 2005-2006 y el 80,4 por ciento entre 2010-2011. Esencialmente, el 76 por ciento del crecimiento total en el volumen de la producción agrícola entre 2005 y 2011 fue soya (40 por ciento) y caña de azúcar (36 por ciento) (ibíd., 5). Si bien el 78 por ciento de los productores de soya están clasificados como pequeños productores, esta cifra contrasta dramáticamente con la minúscula proporción de tierra cultivada con soya sobre la cual éstos tienen control (9 por ciento) (Colque 2014, 61).

A partir de las incursiones iniciales de capitales extranjeros brasileños y, en menor medida argentinos y colombianos en el sector sojero, nuevas formas de inversión transnacional emergieron, prestando menos atención a la producción directa de tierras y más control de las etapas posteriores de la cadena de valor sojera como la cosecha, el procesamiento, el almacenamiento, la comercialización, y la exportación (ibíd., 66). A través de este “complejo de la soya”, cinco empresas llegaron a controlar el 90 por ciento de la producción de soya y sus derivados para la exportación (ibíd.,

56). Estas son Gravelal Bolivia, Industrias de Aceites SAO, Archer Daniel Midland, Industrias Oleaginosas (IOL), Cargill Bolivia y Bunge (Global Company). Los inversionistas transnacionales que operan a través de estas compañías han capturado grandes volúmenes de los mercados de almacenamiento, procesamiento y exportación de Bolivia, incluyendo algunas de las mayores corporaciones agroindustriales del mundo: ADM, Bunge, Cargill y Louis Dreyfus (McKay y Colque 2015, 16).

El capital transnacional estableció inicialmente su presencia en la cadena de valor mediante la adquisición de las ya existentes empresas agroindustriales de Santa Cruz. A menudo lo hacían comprando estas empresas nacionales bajo los nombres de filiales brasileñas y argentinas de las empresas transnacionales (Colque 2014, 59). Debido al incompleto proceso de saneamiento de tierras en este sector más dinámico de la economía agrícola boliviana –la expansión de la frontera agrícola de la soya– no se dispone de datos precisos sobre la relación entre estas nuevas empresas transnacionales y la producción directa de soya y la propiedad de las tierras pero sus actividades parecen consistir principalmente en “compras de cereales, almacenamiento, instalaciones de procesamiento, comercialización y exportación” (McKay y Colque 2015, 16). Al final del primer mandato de Morales, la mayoría de los productores de soya a pequeña escala vendían sus productos directa o indirectamente a estas empresas transnacionales que controlan la cadena de valor de la soya (Colque 2014, 62).

5. Alianza agro-capital–Estado, 2010-2016

Si bien la relación entre la élite agroindustrial de las tierras bajas y el régimen de Morales fue de antagonismo entre 2006 y 2009, a partir de 2010 la situación ha sido dramáticamente diferente (Página Siete 2014, Schipani 2014, Viaña 2012). Después de la derrota política del movimiento autonomista de las tierras bajas, la élite agroindustrial cambió de táctica y optó por una estrecha relación de trabajo con el gobierno de Morales (Castañón 2015, 73). A cambio fueron bien recibidos por el oficialismo. Recordemos que en agosto de 2008 Rubén Costas estaba planeando la salida de Morales de su cargo. Para el 2013, almorzaba regularmente con Morales y se reunía con García Linera para los actos ceremoniales formales del gobierno en Santa Cruz. También ahora el presidente Morales está como en su casa en Santa Cruz en consultas regulares con CAO, ANAPO, CAINCO y la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB), es decir precisamente aquellas organizaciones empresariales que respaldaron el intento de golpe cívico de 2008 (López 2013, Miranda 2013a, 2013b).

Una de las mayores fortalezas del liderazgo de Evo Morales, según la simpática lectura del periodista y ex asesor del gobierno Walter Chávez, es su habilidad para moverse y acomodarse al ritmo del proceso que ha vivido el país en las dos últimas décadas, nunca empujando el cambio más allá de lo que es posible en una coyuntura particular. Podría haber llegado a un pacto con la élite de Santa Cruz

desde su primera administración, pero en lugar de ello rechazó las demandas del bloque burgués-autonomista y entabló una larga lucha contra este bloque en todos los campos políticos. Sin esta decisión de Morales, el futuro del proceso de cambio sería hoy bastante diferente. Para Chávez, el camino de la revolución democrática y cultural introducida por Morales ha sido uno de lucha-victoria-inclusión-expansión. La última incorporación de un sector empresarial políticamente derrotado pero económicamente dinámico en Santa Cruz es simplemente un ejemplo de este camino exitoso de transformación. Al incorporar a bordo formalmente a las élites empresariales, Morales logró la hegemonía cultural, evitó la costosa polarización de la sociedad y prolongó el proceso de cambio revolucionario. Según Chávez, la élite de Santa Cruz ahora acepta el arte de gobernar de Morales, reconociendo en él a un líder moral y político a la cabeza de un proceso histórico que, entre otras cosas, lleva adelante el desarrollo económico de Bolivia (Chávez 2013).

Si bien, por un lado, la elite agroindustrial y el gobierno de Morales posterior a 2010 forjaron una nueva alianza agro-capital-Estado, por otro lado, esto concordó con la ruptura de la relación entre el gobierno y las organizaciones indígenas de las tierras bajas. Se puso en marcha un realineamiento en la composición de clase del partido gobernante. Una señal inicial de las nuevas divisiones fue el conflicto del gobierno con la CIDOB en junio de 2010. A fines de junio, una marcha indígena liderada por la CIDOB partió de Trinidad, la capital del departamento de Beni, en protesta contra la Ley Orgánica Plurinacional Electoral y la Ley Marco de Autonomías, que el gobierno acababa de adoptar como un medio para la implementación de los diferentes componentes de la nueva Constitución. Los manifestantes fueron apoyados por siete miembros indígenas de las tierras bajas, miembros del congreso plurinacional (parlamento) y a la vez militantes del MAS, quienes se declararon en huelga de hambre en solidaridad. Los manifestantes consideraron que las nuevas leyes estaban por debajo de las exigencias históricas de los escaños asignados en el Congreso para la auto-representación indígena; también objetaron que la nueva legislación no contemplaba suficientemente el respeto a la consulta previa libre e informada de las comunidades indígenas antes del inicio de cualquier proyecto de desarrollo en sus territorios y minimizaba la integridad de la autonomía territorial indígena y, por tanto, la libre determinación de los pueblos indígenas en las tierras bajas. Específicamente, querían la aprobación inmediata de mecanismos que protegerían mejor el reconocimiento de las TCO (Viaña 2012, 378).

Los activistas de la CIDOB fueron expulsados por funcionarios del gobierno acusados de “divisores” (fraccionalistas) del bloque nacional-popular y por hacerle el juego al imperialismo y la derecha nacional. El gobierno demostró ser cada vez más incapaz de distinguir entre los activistas indígenas de tierras bajas y los gobernadores de derecha de los departamentos de la “media luna” que habían intentado el golpe cívico de 2008. Incluso si fuera cierto que las fuerzas políticas conservadoras

y las ONG liberales estaban tratando de dirigir las dinámicas dentro de las protestas indígenas de las tierras bajas –como lo fueron inevitablemente, y como lo han hecho durante todo el pasado reciente– el rechazo de las reivindicaciones básicas de la CIDOB fue un error de cálculo extraordinario por parte del gobierno. El error político, como señala Viaña, fue negar la legitimidad fundamental de la lucha indígena de las tierras bajas y, por lo tanto, pasar de la negociación a usar todos los recursos del poder estatal contra el movimiento indígena. Si el gobierno está realmente comprometido con la plurinacionalidad, Viaña (2012, 380, 386) sostiene que un requisito fundamental en las tierras bajas es el respeto a la integridad territorial de las 26 millones de hectáreas de territorios indígenas (TCO), de modo que los pueblos indígenas de las tierras bajas puedan continuar reproduciéndose en lo material y cultural.

A mediados de 2011, las emergentes divisiones dentro del bloque nacional-popular se intensificaron cuando Morales dio luz verde a un antiguo plan para la construcción de una carretera que conecte Villa Tunari (en el departamento de Cochabamba) con San Ignacio de Moxos del departamento de Beni, por medio del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro-Sécure (TIPNIS) (Webber 2015). El conflicto de la carretera por el TIPNIS desencadenó marchas indígenas por parte de aquellos grupos indígenas de tierras bajas que reafirmaban su derecho al autogobierno y a la consulta previa antes que fuera planeado y ejecutado cualquier proyecto de desarrollo. En respuesta el gobierno patrocinó contra-manifestaciones y envió a la policía para reprimir las marchas. Según el gobierno, las protestas indígenas estaban manipuladas, incluso dirigidas, por ONG extranjeras y por la derecha opositora. Si bien hay evidencias de que los intereses estadounidenses y la derecha boliviana trataron de intervenir en la crisis del TIPNIS para sus propios fines, el carácter orgánico del núcleo del movimiento es difícil de desconocer incluso por los más leales partidarios del gobierno. Los marchistas por el TIPNIS han sido críticos con las direcciones de sus organizaciones por ser débiles ante los intentos de la derecha para la cooptación de su lucha. La crisis del TIPNIS condujo a las primeras grandes rupturas formales dentro de las bases rurales del bloque nacional-popular que hasta entonces había brindado su apoyo decisivo al gobierno. A finales de 2011, la CIDOB, junto con el CONAMAQ, se separaron del Pacto de Unidad (Viaña 2012, 362).

Una vez que la CIDOB y el CONAMAQ dejaron formalmente el Pacto de Unidad, el MAS inició un esfuerzo concertado para socavar las capacidades de representación autónomas de los grupos indígenas de las tierras bajas; en 2012, los partidarios del gobierno, disidentes dentro de la CIDOB, rechazaron a las autoridades elegidas y pidieron “una comisión ampliada” a través de la cual se elegirían nuevas autoridades. Más dramático aún, en diciembre de 2013, las filiales minoritarias del MAS dentro de la CONAMAQ ocuparon la sede de esta organización en La Paz, golpeando y expulsando a sus autoridades legítimas. Lo hicieron con el apoyo de la policía, que custodiaba la sede y evitó el regreso de los representantes electos de CONAMAQ (Zibechi

2014). Juntos, el conflicto de la CIDOB de junio de 2010 y el conflicto TIPNIS de 2011, así como las divisiones del Pacto de Unidad más tarde ese mismo año, representaban una nueva consolidación de las capas más conservadoras del partido gobernante y la identificación de los disidentes internos como enemigos del “proceso de cambio”. Esta tendencia se agravó aún más por la expulsión o deserción del partido de varios intelectuales y activistas de izquierda de alto perfil que habían apoyado al gobierno entre 2006 y 2010 (Coordinadora Plurinacional de la Reconducción 2011).

Dentro de esta dinámica, ¿cuáles fueron los resultados del proceso de saneamiento y titulación de tierras? Como se indica en el cuadro 2, en el período 2010-2014 se otorgaron 16,5 millones de hectáreas, divididas entre propiedad estatal (9,1 millones), TCO (7,4 millones), una nueva categoría de propiedad campesina comunitaria (6,5 millones), grandes empresas agrícolas (1,3 millones), empresas agrícolas medianas (964 000) y pequeñas propiedades (2,3 millones). Al final de este período, también había 26,8 millones de hectáreas en proceso de saneamiento y 14,5 millones de hectáreas en las que todavía no se había iniciado ningún proceso (Colque, Tinta y Sanjinés 2016, 175).

Cuadro 2
Estado de avance del proceso de saneamiento y titulación 2010-2014

	Nº Títulos	Superficie en ha	%
1. Superficie objeto de saneamiento		106.751.722	100,0
2. Superficie titulada en el periodo	288.982	16.510.514	15,5 (100)
2.1 Pequeña propiedad	280.102	2.327.345	14,1
2.2 Mediana propiedad	1.823	963.587	5,8
2.3 Empresa agropecuaria	356	1.339.972	8,1
2.4 Propiedad comunaria	6.523	4.500.315	27,3
2.5 Tierras comunitarias de origen (TCO)	178	7.379.295	44,7
3. Tierras fiscales saneadas		9.195.850	8,6
4. Superficie en proceso de saneamiento		26.867.679	25,2
5. Superficie sin sanear		14.555.048	13,6
6. Acumulado periodo anterior	102.703	39.622.631	37,1
6.1 Superficie titulada (1996-2006)	22.178	12.476.740	11,7
6.2 Tierras fiscales saneadas (1996-2006)		106.886	0,1
6.3 Superficie titulada (2007-2009)	80.525	11.799.221	11,1
6.4 Tierras fiscales saneadas (2007-2009)		15.239.784	14,3

Fuente: Colque, Tinta y Sanjinés (2016, 175).

Los 16,5 millones de hectáreas tituladas en este período representan un grado significativo de aceleración en el proceso de titulación de tierras con respecto a fases anteriores. De esta tierra titulada, las TCO representaban poco menos de la mitad, con la propiedad comunitaria campesina equivalente al 27,2 por ciento del total. Este último punto es novedoso, con más de la mitad de la propiedad campesina comunitaria titulada en tierras altas, pero también con una consolidación significativa en las tierras bajas (ibíd., 179). 14 por ciento de las propiedades tituladas fueron otorgadas a pequeños propietarios, gran parte en asentamientos de colonizadores y de cocaleros en la región del Chapare de Cochabamba. Finalmente, las medianas y grandes propiedades representaban el 13,9 por ciento de los títulos, incluyendo 56 títulos otorgados por encima de 5.000 hectáreas cada uno.

En el cuadro 3 se desglosa el número de títulos según el número de beneficiarios, un paso importante en una visión global del proceso de saneamiento y titulación de tierras. Lo que se evidencia con esta información es que en las categorías de propiedades medianas y comerciales cada beneficiario tiene un título de 995 hectáreas en promedio, en TCO de 48 hectáreas y en propiedades campesinas e interculturales de 17 hectáreas (ibíd., 195).

Cuadro 3
Beneficiarios del saneamiento y titulación
según grandes grupos de tipos de propiedad

Tipos de propiedad	Nº de títulos	Nº de beneficiarios	Superficie saneada y titulada (ha)	Hectáreas por título	Hectáreas por beneficiario
Campesinos e interculturales (pequeña propiedad, propiedad comunitaria)	444.880	1.135.283	17.800.000	40	16
Medianos y empresarios (mediana propiedad y empresa agropecuaria)	3.293	6.328	6.300.000	1.913	996
Tierras Comunitarias de Origen (TCO)	1.283	494.414	23.900.000	18.628	48
Total	449.456	1.636.025	48.000.000	107	29

Fuente: Colque, Tinta y Sanjinés (2016, 194).

Previsiblemente, estas propiedades agroindustriales se localizaban principalmente en Santa Cruz y Beni y en menor medida en Tarija, Chuquisaca y el norte de La Paz (ibíd., 180). En el período 2010-2014, ha habido un mayor número de hectáreas tituladas y distribuidas a favor del sector agroindustrial, y un mayor tamaño promedio de las propiedades tituladas para el agronegocio, hasta 3.763 hectáreas por título comparado con 1.500 entre 1996 y 2006 (ibíd., 191).

Los títulos otorgados a las grandes y medianas empresas no son tan grandes en superficie como las TCO o las propiedades comunitarias campesinas, pero son

cualitativamente distintos. Y es esta atención a la calidad productiva de los suelos titulados la que hay que subrayar en cualquier evaluación razonable de la reforma agraria durante la época de Morales hasta la fecha. Las zonas estratégicas de las tierras agrícolas, ganaderas y forestales más productivas del país se concentran en las tierras bajas, precisamente en aquellas áreas en que se han concentrado los títulos para medianas y grandes empresas (ibíd., 184). Un rasgo característico de las TCO, por el contrario, es que tienden a situarse en los márgenes de los centros agroindustriales y corredores económicos (carreteras y redes), y gran parte tiene un potencial agrícola pobre o nulo (ibíd.). El patrón recurrente de distribución y saneamiento es que las tierras marginales se han consolidado en favor de las mayorías rurales y las tierras potencialmente productivas en favor del sector agroindustrial (ibíd., 196).

Como se indica en el Cuadro 4, lo sustancial de este patrón puede claramente demostrarse a través de una mirada más cercana a los resultados del saneamiento de tierras en la “zona de expansión” de Santa Cruz, donde se ubica el 75 por ciento de la tierra cultivada en el país. Los datos demuestran que cuando se trata de tierras cultivables, los campesinos e indígenas tienen acceso a menos de la tercera parte mientras que el resto de las tierras productivas han quedado consolidadas y tituladas a favor de medianas propiedades y empresas agropecuarias (ibíd., 201)

Cuadro 4
Resultados de saneamiento en la ‘zona de expansión’
agroindustrial de Santa Cruz (1996-2014)

Tipos de propiedad	Superficie saneada y titulada (ha)	%	Nº de títulos	%	Superficie por título (promedio)
Pequeña propiedad	618.350	16,9	17.593	82,9	67,4
Mediana propiedad	544.743	14,9	1.672	7,9	325,8
Empresa agropecuaria	1.711.014	46,7	888	4,2	1.926,8
Propiedad comunaria	323.924	8,8	376	1,8	861,5
Tierras Comunitarias de Origen(TCO)	138.899	3,8	87	0,4	1.596,5
Sin datos	329.419	9,0	622	2,9	529,6
Total	3.666.349	100,0	21.238	100,0	5.307,6

Fuente: Colque, Tinta y Sanjinés (2016, 201).

Es más, las proyecciones oficiales del gobierno sugieren que a la conclusión del proceso de saneamiento, el sector agroindustrial mediano y grande tendrá titulados entre 15 y 17 millones de hectáreas, principalmente en Beni y Santa Cruz. El expedito proceso de saneamiento de tierras en el gobierno de Morales después de 2010 ha llevado a titular por año entre 2 y 3 millones de hectáreas a

favor del sector agroindustrial. La *path dependency* de este conjunto de prioridades estatales es que la tierra más valiosa en el país continuará siendo controlada por un pequeño grupo de capitalistas agroindustriales, a expensas de la mayoría sin tierra o con poca tierra (ibíd., 202).

Como parte de su llamada Agenda Patriótica 2025, el gobierno propuso que los agroindustriales de Santa Cruz aumenten sustancialmente sus exportaciones en los próximos años mediante la expansión de la superficie cultivada en un millón de hectáreas por año durante la próxima década (Castañón 2015, 67). Esto significaría una expansión de 3,5 millones de hectáreas de cultivo en 2015 a 13,6 millones de hectáreas en 2025. En concordancia con la visión del gobierno, el sector agroindustrial de Santa Cruz proyectó triplicar el volumen de su producción de 15 a 45 millones de toneladas métricas en el mismo periodo de tiempo (Ramírez 2015, 1). Para apoyar esta dinámica, el gobierno ha prometido más inversión pública en infraestructura productiva y transporte, así como garantías en la provisión de insumos energéticos subsidiados y estabilidad cambiaria (ibíd.). Si los patrones de crecimiento de la agroindustria son algún tipo de señal y si las reverberaciones de la crisis económica mundial continúan impulsando los precios de las materias primas a la baja, estas proyecciones pueden muy bien resultar fantásticas. Sin embargo, son igualmente indicadores del grado de avance de la alianza agro-capital-Estado en Bolivia desde 2010.

Los resultados de esta alianza han sido la ampliación de la frontera agrícola para la soya en Santa Cruz y la concomitante disminución de la importancia de la agricultura campesina en tierras altas. La superficie dedicada a distintos tipos de cultivo entre 1989 y 2013 (Cuadro 5) proporciona una visión panorámica de esta tendencia general.

En 2006 Santa Cruz representaba el 71,9 por ciento de la producción agrícola total de Bolivia. En 2013 esta cifra se había expandido al 76,3 por ciento. Se observó una disminución en la participación relativa de la producción en los valles y altiplano que, como hemos visto, está poblada por la mayoría de los campesinos del país (Ormachea 2015, 173). En los últimos 25 años, ha habido un crecimiento en la superficie dedicada a los cultivos industriales como la caña de azúcar y el arroz y, sobre todo, a los cultivos oleaginosos, incluyendo girasol y sésamo, pero con predominio de soya. Este último cultivo alcanzó 1.176.263 hectáreas de superficie cultivada en 2013 (ibíd., 173). La disminución o estancamiento de la productividad campesina explica en parte la creciente dependencia de las importaciones de alimentos. El valor de las importaciones de alimentos experimentó un aumento de 219 por ciento entre 2005 y 2014, de US\$ 227 millones a US\$ 723 millones. En 2014, el 9 por ciento de las importaciones totales fueron las importaciones de alimentos (Colque, Urioste y Eyzaguirre 2015, 40) A pesar de una pronunciada retórica en torno a la seguridad alimentaria del gobierno

de Morales en el período posterior a 2010, en la práctica el Estado ha apoyado la expansión del sector exportador controlado transnacionalmente, mientras que ha disminuido la producción campesina y comunitaria. En contraste con las promesas de los diversos planes de desarrollo del gobierno de Morales, la economía comunitaria no ha podido transformarse en sí misma como un importante proveedor de alimentos, ni generador de empleos, ni fuente de mejores ingresos para los campesinos. Lo que cada vez es más claro es la continuidad de la estructura agraria enraizada en las exportaciones primarias, la inversión extranjera, el saneamiento legal de grandes propiedades privadas en las zonas agrícolas más productivas y la limitada redistribución de la propiedad fiscal en áreas de bajo potencial agrícola (Mun 2015, 33-35).

Cuadro 5
Superficie cultivada y tipo de producción agrícola, 1989-1990 y 2012-2013

Cultivos	Área cultivada				Tasa de crecimiento, 1989-1990 a 2012-2013 ^a
	1989-1990		2012-2013		
	Hectáreas	Porcentaje	Hectáreas	Porcentaje	
Arroz	112,372	9.0	157,503	4.8	1.48
Maíz	225,687	18.0	328,646	9.9	1.65
Sorgo	25,302	2.0	201,630	6.1	9.44
Trigo	86,867	6.9	158,020	4.7	2.64
Caña de azúcar	63,396	5.1	159,032	4.8	4.08
Girasol	3,725	0.3	280,864	8.5	20.68
Sésamo	0	0.0	15,000	0.5	—
Soya	178,306	14.3	1,176,268	35.5	8.55
<i>Subtotal</i>	695,655	55.6	2,476,962	74.8	5.68
Otros ^b	555,846	44.4	836,896	25.2	1.80
Total	1,251,501	100.0	3,313,859	100.0	4.32

Fuente: Ormachea (2015, 174).

^a datos preliminares.

^b Incluye cebada, quinua, coco, café, plátano, durazno, mandarina, naranja, piña, uva, ajo, apio, poroto, arveja, apio, tomate, algodón, maní, papa, yuca, alfalfa y col.

Dentro del sector sojero, la “semiproletarización y el rentismo pequeño-burgués” de los pequeños propietarios se están desarrollando rápidamente (McKay y Colque 2015, 2). Los costos exorbitantes de los insumos de agro-capital –semillas, fertilizantes, herbicidas, pesticidas y maquinaria–, así como los costos de almacenamiento y procesamiento, ha significado que muchos pequeños productores pierdan sus propias tierras. De forma creciente alquilan sus pequeñas parcelas

de tierra a medianas y grandes empresas y se esfuerzan para conseguir diversas formas de trabajo asalariado agrícola o urbano (ibíd.). La creciente estratificación en el sector sojero ha asegurado que la base material de la industria –insumos industriales, instalaciones de procesamiento y almacenamiento– permanezca en manos de un grupo concentrado de agroindustriales (Castañón 2015, 75). Ahora los costos de capital rondan alrededor de US\$ 406 por hectárea para cultivar soya de manera competitiva. Esto requiere tanto el acceso a la tierra en una escala suficientemente grande para alcanzar la rentabilidad esperada como el acceso a financiamiento para cubrir el costo de la tecnología y los insumos requeridos (ibíd., 78).

En uno de los estudios de caso más exhaustivos disponibles sobre la frontera agrícola sojera de Santa Cruz, Castañón (2015) investigó 50 familias campesinas en el asentamiento de Cuatro Cañadas y encontró una extensa evidencia sobre la intensificación de la estratificación interna de los campesinos. Un tercio de las 50 familias no tiene tierra, mientras que las restantes tienen un tamaño promedio de 50 hectáreas. Incluso para aquellos con tierra, la inversión en los insumos agrícolas necesarios está fuera del alcance de la mayoría de ellos (ibíd., 78). En este asentamiento los campesinos pobres constituyen aproximadamente el 30 por ciento de las 50 familias estudiadas. Tienden a ser los migrantes recientes de los Andes o hijos de familias que emigraron a la zona en los años setenta del siglo pasado. Los campesinos pobres no tienen tierras o tienen solo pequeñas parcelas familiares que no permiten su reproducción campesina, por lo tanto, venden regularmente su fuerza de trabajo generalmente a la agroindustria o a los campesinos ricos (ibíd., 79). Los campesinos medianos constituyen la mayoría (58 por ciento) de las familias del estudio de caso, por lo general llegaron a Cuatro Cañadas en los años setenta como parte de los primeros proyectos de colonización. Aunque tienden a tener acceso a parcelas de 50 hectáreas por familia, carecen de capital suficiente para comprar los insumos necesarios para poner la tierra en producción competitiva. Aunque algunos campesinos medianos contraen préstamos para financiar la producción directa de sus tierras, la mayoría prefiere alquilarlas a otros productores (ibíd., 80). A cambio del alquiler de sus tierras, estas familias suelen recibir el 25 por ciento de las ganancias netas del cultivo y a menudo combinan estos ingresos con la venta de su propia fuerza de trabajo en otros lugares. Los campesinos ricos se han establecido en la zona por lo menos desde hace 15 años y representan el 10 por ciento de las familias, generalmente poseen en promedio 67 hectáreas de tierra pero controlan entre 100 y 200 hectáreas debido a que tienen el monopolio de la maquinaria agrícola necesaria para los cultivos de otros campesinos que no la tienen. Estos campesinos ricos pueden invertir en la renovación y expansión de los medios de producción y pagar el empleo de los trabajadores asalariados. No obstante, en el complejo sojero en su conjunto,

los campesinos ricos están situados en una posición profundamente subordinada frente a las grandes empresas agroindustriales (ibíd., 81).

Esta particular dinámica de clase en un asentamiento se correlaciona con tendencias generales en la estructura agraria de clase durante los 10 años del gobierno del MAS. Las instituciones públicas involucradas en la reforma agraria del gobierno del MAS desde 2010 se han preocupado principalmente por agilizar el proceso de saneamiento y titulación de tierras, pero sin prestar atención a la expropiación y redistribución de grandes propiedades, lo cual no ha llevado a una transformación o modificación seria de la estructura de clases existente en el campo (Colque, Tinta y Sanjinés 2016, 221). El mayor logro para el sector indígena-campesino de todas las iniciativas de reforma agraria desde 1996 ha sido la introducción de la categoría de TCO y el reconocimiento legal de los territorios indígenas en tierras altas y bajas. Sin embargo, esta conquista parcial del territorio mediante la lucha indígena está llena de contradicciones, como lo hemos señalado más arriba en la discusión sobre el carácter heterogéneo y variado de las TCO, las incursiones del capital multinacional extractivo y la actual soberanía estatal en cuanto a los derechos sobre los recursos naturales del subsuelo. El proceso de reconocimiento de los derechos de propiedad de las tierras también ha facilitado la consolidación de derechos legales de una capa de pequeños campesinos capitalizados en diferentes áreas del país. En particular, los interculturales, es decir los campesinos quechuas y aymaras migrantes de las tierras altas hacia las tierras bajas, tienen ahora derechos consolidados y títulos de pequeña propiedad. Ellos son productores de coca, soya, quinua y otros cultivos comerciales de exportación en pequeña escala; no son pequeños productores independientes, sino que están profundamente integrados en cadenas de valor del sector agroindustrial (ibíd., 218). Algunos de estos pequeños productores capitalizados se convirtieron en campesinos ricos, apoyándose en la compra de la fuerza de trabajo de los campesinos semiproletarizados y a veces utilizando maquinaria sofisticada e insumos tecnológicos para sus procesos de producción. Políticamente, este sector del campesinado ha sido un importante respaldo popular para el gobierno de Morales.

Si bien los campesinos ricos están empleando más mano de obra asalariada de los valles y las tierras altas, por el contrario, el sector agroindustrial mediano y grande ha reducido su demanda de mano de obra a través de métodos de producción cada vez más intensivos en capital (ibíd., 219). Como lo sugiere el estudio más completo sobre la reforma agraria disponible en Bolivia, el resultado del saneamiento y titulación de tierras en la era de Morales no ha sido la modificación del carácter fundamentalmente dual del agro boliviano, con grandes propiedades agroindustriales y campesinos sin tierra y poca tierra, sino que la reforma agraria ha complejizado la organización de la estructura dual, las relaciones sociales y económicas y las alianzas políticas que existen entre el agro-

capital y el Estado y también entre el agro-capital y los agricultores familiares capitalizados (ibíd., 220).

Esta nueva complejidad toma la forma de tres sectores inestables y relacionados. En primer lugar, hay un núcleo que controla la mayor parte de la renta de la tierra. En segundo lugar, existe un sector semiperiférico cuya viabilidad depende de las relaciones subordinadas con el núcleo. En tercer lugar y por último, existe un sector excluido que es funcional a los dos primeros en forma de mano de obra asalariada o en forma de ejército de reserva de mano de obra potencial, y es una población rural excedente excluida en su totalidad de las necesidades de acumulación de capital en el campo. Según una estimación, el núcleo y el sector semiperiférico que están principalmente en las tierras bajas, constituye el 18 por ciento de las unidades agropecuarias, pero controla el 66 por ciento de la tierra productiva en el país. El sector excluido, por su parte, representa el 82 por ciento de las unidades agropecuarias, pero sólo controla el 34 por ciento de las tierras productivas (ibíd., 221). Políticamente, el núcleo agroindustrial estuvo en estrecha alianza con el Estado entre 1996 y 2006. Esto se rompió en un período abiertamente antagónico en la primera administración de Evo Morales (2006-2009). Sin embargo, después de la derrota del intento de golpe cívico, el núcleo agroindustrial forjó una alianza renovada con el gobierno de Morales posterior a 2010, junto con el sector semiperiférico de pequeños productores capitalizados. Juntos constituyen el bloque de clases agrarias que sustenta al gobierno (ibíd., 222).

Los actores semiperiféricos son los campesinos ricos del altiplano, valles y tierras bajas, incluyendo al sector de los interculturales. Son el núcleo principal dentro de la CSUTCB, misma que ha sido profundamente cooptada por el Estado bajo el gobierno de Morales. Ellos tienen autoridad directa o indirecta sobre una serie de instituciones públicas, entre ellas el Servicio Nacional de Reforma Agraria (SNRA), el INRA, la Comisión Agraria Nacional (CAN) y el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras (MDRyT) (ibíd., 223). Sin embargo, los beneficios para este sector que derivan de su incorporación subordinada al Estado derivan de la reproducción de niveles superiores del poder agrario, esto es, la expansión en curso del capital agroindustrial validada y subsidiada por el Estado en la frontera agrícola de Santa Cruz (ibíd., 224). La absorción de determinadas capas del campesinado dentro de estos aparatos del Estado, tal como Gramsci señala sobre el “transformismo”, condujo a la decapitación de los movimientos campesinos, la contención de la militancia campesina independiente, antes que a una transformación fundamental de los aparatos estatales y de la economía política de la Bolivia rural. Entretanto, una solución a través de una reforma agraria queda pendiente para la mayoría sin tierra o con poca tierra y en una contradicción estructural con las prioridades de la composición de clase de los nuevos aliados rurales del gobierno de Morales. Para Alejandro Almaraz, ex viceministro de Tierras, quien fue alejado de su cargo en

2011 por desafiar abiertamente el giro conservador de la dirección del MAS, el período posterior a 2010 ha sido uno de derrota para la mayoría indígena-campesina del campo. Lo que él consideraba como proyecto indígena-campesino y potencial del proceso de la Asamblea Constituyente y los primeros años de la Ley de Reconducción Comunitaria de la Reforma Agraria para redistribuir la tierra por medio de la reversión y la titulación comunitaria y desterrar así las antiguas estructuras de la vida agraria en Bolivia, han sido socavados. La oligarquía agraria de Santa Cruz, en alianza con el agronegocio transnacional, se reinstaló en el poder a través de una nueva configuración agro-capital-Estado (Almaraz 2015, 54). Irónicamente, el aspecto más regresivo de la ideología nacionalista de la revolución de 1952, basado en la “Marcha hacia el oriente”, ha encontrado su expresión más madura en la segunda década del siglo XXI, bajo el liderazgo nacional de un ex cocalero de origen indígena: Evo Morales.

6. Conclusión

Este trabajo ha intentado explicar la dinámica cambiante de la lucha de clases, la composición del bloque agrario gobernante, las políticas fundamentales de la reforma agraria y sus resultados concretos y más importantes a lo largo de la era Morales, desde 2006 hasta la actualidad. Estos procesos han sido analizados, política y económicamente, por medio del concepto de “transformismo” de Gramsci, en el que existe una convergencia programática de las fuerzas históricamente opuestas de la derecha y la izquierda y la domesticación de la contestación política de los movimientos sociales populares mediante su absorción parcial dentro de los aparatos burocráticos del Estado. Gramsci vio una combinación desigual y dialéctica de las tendencias de transformación y restauración coexistiendo en épocas de revolución pasiva. Las revoluciones pasivas no culminan en la restauración total del *statu quo* anterior pero tampoco concluyen en un cambio radical. Gramsci hizo hincapié en la dialéctica de la revolución/restauración, de la transformación/preservación. Sin embargo, mientras estas tendencias duales coexisten, en última instancia solo una de ellas caracteriza el proceso o ciclo de un período dado. En la lucha de clases rurales en la Bolivia bajo Morales, hubo un período de relativamente abierta confrontación y contingencia en el cual una transformación profunda se avizoraba como una posibilidad (2006-2009), seguido por otro período de cierre de esta ventana de oportunidad y de firme realineamiento y restauración mediante una inusual alianza agro-capital-Estado (2010-2016).

En el primer período del gobierno de Morales (2006-2009), parecía haber una ruptura absoluta con la política neoliberal en materia agraria. La Ley de Reconducción Comunitaria de la Reforma Agraria fue introducida en 2006, el Pacto de Unidad luchó por transformaciones a gran escala en la estructura agraria de

clase desde dentro y fuera de las paredes de la Asamblea Constituyente y la nueva Constitución de 2009 parecía incorporar algunas de las aspiraciones del movimiento indígena-campesino, aun cuando fueran expresamente contradictorias en varios aspectos. La élite agroindustrial de las tierras bajas se había enfrentado al gobierno de Morales en este período, movilizándolo sus considerables recursos materiales para una lucha autonómica y regionalista para desestabilizar el régimen y desbaratar la Asamblea Constituyente, incluyendo un intento de golpe cívico en septiembre de 2008.

Sin embargo, una vez que esta derecha autonomista fue políticamente derrotada, hubo una reconfiguración en la composición de clases del bloque gobernante, expresada en la tesis de una alianza agro-capital-Estado, entre 2010 y 2016. Los resultados, como hemos visto, han consolidado el capital agroindustrial, tanto nacional como extranjero, en el sector sojero, integrando de forma subordinada a los campesinos ricos y explotando el trabajo asalariado de los sin tierra o con poca tierra o excluyéndolos totalmente como parte de la población excedentaria irrelevante para la acumulación capitalista.

Agradecimientos

Agradezco a Enrique Castañón Ballivián por brindarme pistas, sugerencias y fuentes que ayudaron en la investigación para este trabajo. También agradezco a Leandro Vergara-Camus y Cristóbal Kay por la coordinación de este número especial, y particularmente a Leandro por su extenso comentario sobre las primeras versiones de este trabajo.

Referencias

- Almaraz, A. (2015). Las luchas indígenas y campesinas en los dos ciclos de la Reforma Agraria. En *Memoria del Seminario: Recientes transformaciones agrarias en Bolivia* (págs. 49-57). La Paz: Fundación TIERRA.
- Assies, W. (2011). Bolivia's new constitution and its implications. En A. J. (Ed.), *Evo Morales and the Movimiento al Socialismo in Bolivia* (págs. 93-116). Londres: Institute for the Study of the Americas, University of London.
- Brabazon, H., & Webber, J. (2014). Evo Morales and the MST in Bolivia: Continuities and discontinuities in agrarian reform. *Journal of Agrarian Change*, 14, 435-465.
- Castañón, E. (2015). Discurso empresarial vs. realidad campesina: la ecología política de la producción de soya en Santa Cruz, Bolivia. *Cuestión Agraria*(2), 65-86.
- Chávez, W. (2013). Evo, Santa Cruz y la Revolución: El largo camino hacia la conquista de la hegemonía. *El desacuerdo*, sep. 29.
- Colque, G. (2014). *Expansión de la frontera agrícola. Luchas por el control y apropiación de la tierra en el oriente boliviano*. La Paz: TIERRA.
- Colque, G., Tinta, E., & Sanjinés, E. (2016). *Segunda Reforma Agraria. Una historia que incomoda*. La Paz, Bolivia: TIERRA.

- Colque, G., Urioste, M., & Eyzaguirre, J. (2015). *Marginalización de la agricultura campesina e indígena. Dinámicas locales, seguridad y soberanía alimentaria*. La Paz, Bolivia: Fundación TIERRA.
- Control Ciudadano. (2012). *Reconducción comunitaria de la reforma agraria y producción agrícola: Evaluación agrícola*. La Paz: CEDLA.
- Coordinadora Plurinacional de la Reconducción. (junio de 2011). Manifiesto: "Por la recuperación del proceso de cambio para el pueblo y con el pueblo". Obtenido de <http://www.rebellion.org/noticia.php?id=131653>
- Córdoba, D., & Jansen, K. (2014). The return of the state: Neocollectivism, agrarian politics and images of technological progress in the MAS era in Bolivia. *Journal of Agrarian Change*, 14(4), 480-500.
- Córdova, D., Kees, J., & González, C. (2016). Empowerment through articulations between post-neoliberal politics and neoliberalism: value chain alliances in Bolivia. *Canadian Journal of Development Studies / Revue canadienne d'études du développement*. Routledge, 1-20.
- Cuesta, J., Edmeades, S., & Madrigal, L. (2013). Food security and public agricultural spending in Bolivia: Putting money where your mouth is? *Food Policy*, 40, 1-13.
- Dunkerley, J. (1984). *Rebellion in the veins: Political struggle in Bolivia, 1952-1982*. Londres: Verso.
- Eckstein, S. (1983). Transformation of a "Revolution from Below" - Bolivia and International Capital. *Comparative Studies in Society and History*, 25(1), 105-135.
- Fabricant, N., & Postero, N. (2015). Sacrificing indigenous bodies and lands: The political-economic history of lowland Bolivia in light of the recent TIPNIS debate. *The Journal of Latin American and Caribbean Anthropology*, 20(3), 452-474.
- García Linera, A. (2011). *Tensiones creativas de la revolución: La quinta fase del proceso del cambio*. La Paz: Vicepresidencia del Estado Plurinacional.
- Gill, L. (1987). *Peasants, entrepreneurs, and social change: Frontier development in lowland Bolivia*. Boulder, CO: Westview Press.
- Gobierno de Bolivia. (2006). Plan Nacional de Desarrollo 2006-2010. Decreto Supremo N° 29272. La Paz: Gaceta Oficial de Bolivia.
- Gobierno de Bolivia. (2010). Programa de gobierno 2010-2015. La Paz: Gobierno de Bolivia.
- INRA. (2010). *La tierra vuelve a manos indígenas y campesinas*. La Paz: Instituto Nacional de Reforma Agraria.
- INRA. (2015). *Estado de saneamiento*. La Paz: Instituto Nacional de Reforma Agraria.
- La Prensa. (17 de mayo de 2006). El Estado promoverá desarrollo de tres "plataformas" agrarias. Obtenido de http://www.derechoshumanosbolivia.org/noticia.php?cod_noticia=NT20060517130516
- La Razón. (4 de noviembre de 2012). De leal al MAS a disidente. Obtenido de http://www.la-razon.com/index.php?url=/suplementos/animal_politico/leal-disidente_0_1717028349.html
- Lizárraga Aranibar, P., & Vacaflores Rivero, C. (2014). La descolonización del territorio: Luchas y resistencias campesinas e indígenas en Bolivia. En G. Almeyra, L. Concheiro Bórquez, J. Mendes Pereira, & C. Porto-Gonçalves (Edits.), *Capitalismo: Tierra y poder en América Latina (1982-2012). Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú, Venezuela (Vol. II)* (págs. 17-63). Buenos Aires: CLACSO.
- López Rivas, G. (2013). El presidente en Santa Cruz. *El desacuerdo*, sep. 29.
- McKay, B., & Colque, G. (2015). Bolivia's soy complex: the development of 'productive exclusion'. *The Journal of Peasant Studies*, 1-28 <http://dx.doi.org/10.1080/03066150.2015.1053875>.

- Miranda, B. (2013a). El fin de las logias y el último autonomista. *El desacuerdo*, sep. 29.
- Miranda, B. (2013b). Santa Cruz, el objeto del deseo: ¿El Proceso de Cambio tiene rostro cambia? . *El desacuerdo*, junio 23.
- Modonesi, M. (2012). Revoluciones pasivas en América Latina: Una aproximación gramsciana a la caracterización de los gobiernos progresistas de inicio del siglo. En M. Thwaites Rey (Ed.), *El estado en América Latina: Continuidades y rupturas* (págs. 139-166). Santiago: CLACSO.
- Modonesi, M. (22 de junio de 2013). El fin de la revolución pasiva en Brasil. *La Jornada*. Obtenido de <http://www.jornada.unam.mx/2013/06/22/opinion/019a1mun>
- Mun, N. (2015). La problemática transición boliviana hacia la época postneoliberal: el caso de la economía comunitaria. *Revista de Estudios Sociales* 54 (octubre-diciembre), 25-38.
- Ormachea Saavedra, E. (2007). *¿Revolución agraria o consolidación de la vía terrateniente? El gobierno del MAS y las políticas de tierras*. La Paz: CEDLA.
- Ormachea Saavedra, E. (2015). Pequeña y gran producción agrícola capitalista y trabajo asalariado en Bolivia. En A. Riella, & P. Mascheroni (Edits.), *Asalariados rurales en América Latina* (págs. 165-186). Buenos Aires: CLACSO.
- Página Siete. (9 de octubre de 2014). García Linera afirma que Santa Cruz se abrió al Proceso de Cambio. Obtenido de <http://www.paginasiete.bo/nacional/2014/10/9/garcia-linera-afirma-santa-cruz-abrio-proceso-cambio-34698.html>
- Pérez L., M. (noviembre de 2015). El proceso de descomposición de la economía campesina boliviana. *Cuestión Agraria*(2), 39-63.
- Radhuber, I. (2015). State power and political-power balance in Bolivia: An analysis through laws and finances. *Latin American Policy*, 6(1), 89-109.
- Ramírez Funes, N. (2015). La “nueva fase” del “Proceso de Cambio” reproduce el proyecto neoliberal de apoyo a la agroindustria. *Boletín Agrario*, 1(abril), 1-4. Obtenido de https://www.cedla.org/sites/default/files/abr_2015_boletin_agrario_cedla_1_final_0.pdf
- Regalsky, P. (septiembre de 2009). *Las paradojas del proceso constituyente boliviano*. Recuperado el 13 de marzo de 2016, de Herramienta Web 2: <http://www.herramienta.com.ar/herramienta-web-2/las-paradojas-del-proceso-constituyente-boliviano>
- Regalsky, P. (2010). Political processes and the reconfiguration of the state in Bolivia. *Latin American Perspectives*, 37(3), 35-50.
- Regalsky, P. (marzo de 2011). *Acerca de las paradojas de la crisis hegemónica, del nacionalismo de Evo y de la confusión en los movimientos indígenas*. Recuperado el 16 de marzo de 2016, de Herramienta Web 46: <http://www.herramienta.com.ar/revista-herramienta-n-46/acerca-de-las-paradojas-de-la-crisis-hegemonica-del-nacionalismo-de-evo-y-d>
- Schipani, A. (2014). Bolivia's Evo Morales secures redistributionist mandate. *The Financial Times* (13 de octubre).
- Stearman, A. (1985). *Camba and Kolla: Migration and development in Santa Cruz, Bolivia*. Orlando, FL: University of Central Florida Press.
- Toranzo, C. (2015). El agro en el modelo de desarrollo boliviano: La continuidad del Estado anticampesino. En *Recientes transformaciones agrarias en Bolivia* (págs. 31-38). La Paz: Fundación TIERRA.
- Urioste, M. (2012). Concentration and “foreignisation” of land in Bolivia. *Canadian Journal of Development Studies/Revue canadienne d'études du développement* 33(4), 439-457.
- Viaña, J. (2012). Estado plurinacional y nueva fase del proceso boliviano. En M. Thwaites (Ed.), *El Estado en América Latina: Continuidades y rupturas* (págs. 375-394). Buenos Aires: CLACSO.

- Webber, J. (2011). *From rebellion to reform in Bolivia: Class struggle, indigenous liberation and the politics of Evo Morales*. Chicago: Haymarket.
- Webber, J. (2015). Revolution against “progress”: Neo-extractivism, the compensatory state, and the TIPNIS conflict in Bolivia. En S. Spronk, & J. Webber (Edits.), *Crisis and contradiction: Marxist perspectives on Latin America in the global political economy* (págs. 302-333). Chicago: Haymarket.
- Zavaleta M., R. (1986). *Lo nacional - popular en Bolivia*. México: Siglo XXI.
- Zibechi, R. (2014). Developmentalism and social movements in Bolivia. *Americas Program, dic. 9*.

